

# Perú 70: la puerta estrecha

POR MARCEL NIEDERGAN

## I. LA "PROMOCION TERREMOTO"

"En la primavera de 1965, cuando el movimiento de guerrillas estalló en el departamento de Cuzco, yo era jefe de los servicios de información del ejército. Debí saber rápidamente 'quién era quién'. Pude, siempre luchando contra las guerrillas dirigidas por hombres de la izquierda revolucionaria, analizar las causas profundas de la insurrección. . ."

El general Jorge Fernández Maldonado, ministro de Minas y Energía del Gobierno peruano, era coronel el 3 de octubre de 1968 cuando los militares decidieron poner fin al experimento de Belaúnde Terry, elegido presidente de la República en julio de 1963 gracias a la "buena voluntad" de las fuerzas armadas. Fernández Maldonado es considerado como uno de los hombres más influyentes del nuevo equipo militar. De talla mediana, delgado, cara lampiña, sonrisa enigmática, no posee la cordialidad calurosa del general Velasco Alvarado, presidente de la República, o la refinada cortesía del general Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores.

### *Un Saint-Just en uniforme*

El Ministerio de Minas y Energía se encuentra en el futuro barrio residencial de San Borja. Como en muchas otras nuevas urbanizaciones de una metrópoli que cuenta ya con dos millones y medio de habitantes, las calles están trazadas, los arbotantes alumbran el alba fresca y neblinosa de Lima. Los diplomáticos y políticos de la capital reciben de buena gana al visitante tarde en la noche, "a la española". No es raro que Víctor Raúl Haya de la Torre, el envejecido líder del APRA<sup>1</sup> concierte sus citas después de las dos de la mañana, rodeado de recelosos jóvenes militantes, en la Casa del Pueblo de la avenida Alfonso Ugarte.

El general Fernández Maldonado comienza su jornada a las 8 de la mañana. Una oficina funcional con los muros cubiertos por gráficas de producción, obras de sociología y economía política, y, sobre una mesa baja, las últimas publicaciones del

Instituto de Estudios Peruanos dirigido por el profesor Matos Mar: así aparece el puesto de mando de aquel que se le representa en Lima como el Saint-Just con uniforme del régimen, el líder de los "coroneles progresistas" y el "ideólogo" del ala "izquierda" del gobierno ¿Quiere esto decir que existe un ala "derecha"?

El Ministro rechaza firmemente esta interpretación: "Nosotros somos una fuerza indivisible. Nadie podrá apartarnos de nuestros objetivos revolucionarios, nadie podrá detener a los hombres que tienen cita con la historia. Las guerrillas fracasaron en 1965 porque fueron lanzadas demasiado pronto. Los campesinos no estaban preparados para esta situación. Pero más allá de esta razón inmediata, hemos descubierto las causas últimas, que explican la insurrección: la miseria, la explotación despiadada de las masas, la injusticia social de las estructuras arcaicas. . . El comunismo no es una solución para el Perú. Ahora el objetivo es claro: es necesario luchar contra la dependencia externa, que constituye la base del subdesarrollo. Esto implica que afrontaremos, que debemos afrontar, los intereses extranjeros, principalmente norteamericanos, que no se preocupan por el interés peruano. Esto implica que debemos luchar contra la oligarquía local estrechamente ligada a los intereses extranjeros. . ."

El tema de las "tendencias" en el seno de las fuerzas armadas es hoy un tabú en Lima. El liberalismo indiscutible del cual el régimen ha dado pruebas desde octubre de 1968, no prohibiendo las actividades de los partidos políticos y tolerando las críticas, a veces violentas, de la prensa, se detiene frente a los estados-mayores. Por haber puesto en duda el "principio sagrado" de la unidad del ejército, el director de la revista *Caretas*, Enrique Zileri, tuvo que dejar el país, durante algunos meses, el verano pasado. Por haber infringido esta misma regla —ciertamente con mucha mordacidad— la revista *Visión*, dependiente del grupo Time-Life<sup>2</sup> fue prohibida el pasado diciembre. Esta intransigencia de los militares en lo que concierne a los "juicios" de los civiles sobre "sus asuntos" es sin duda, en

<sup>1</sup> APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924, en México.

<sup>2</sup> *Visión*, editada en México, es dirigida por Alberto Lleras Camargo, antiguo presidente de Colombia y vocero de la corriente liberal pro norteamericana.

parte, el origen de la promulgación de un Estatuto de la Prensa, severamente criticado incluso por los medios más favorables a la Junta. Esto, que bien podría llamarse un reflejo de casta, nos lleva en cierta manera a las especulaciones sobre la eventual formación de un nuevo partido político "revolucionario" que sería el firme sostén del gobierno militar. "Esto está por completo fuera de consideración", nos ha declarado sin ambages Augusto Zimmerman, director de los servicios de información de la Presidencia y uno de los consejeros civiles más escuchados del general Velasco Alvarado.

Falta que los oficiales superiores, aquellos de mayor promoción, se declaren partidarios del general Fernández Maldonado, para quien "la revolución debe terminar con la oligarquía". La mayor parte de ellos no cumple aún los cincuenta. Promovidos oficiales en 1940, año de un violento terremoto, por lo cual fueron bautizados en el ejército como la "promoción terremoto". Jugaron un papel importante en 1965 en la represión del movimiento de guerrillas, más particularmente en los servicios de información. Esta tarea, reclamada por un Parlamento presa de la demagogia,<sup>3</sup> fue aceptada con repugnancia evidente, pero cumplida con energía por el ejército. En menos de seis meses los fuegos de la guerrilla del MIR en el sur del país fueron aniquilados, y los principales líderes arrestados o muertos. Esta experiencia brutal, y desde cierto punto de vista amarga, ha tenido consecuencias importantes que aparecen claramente hoy en día.

Los coroneles se esfuerzan por practicar sobre el terreno la teoría de la "contrainsurrección" estudiada en las escuelas de guerra del Canal de Panamá, combinando la acción de las unidades especiales con la de los "grupos cívico-militares" encargados de construir carreteras y ayudar a los campesinos.

El interés de las fuerzas armadas por las cuestiones sociales y por la reforma agraria no es, sin embargo, nuevo. En los años 30, el régimen militar instituido por el general Sánchez Cerro presentaba ya los rastros típicamente "populistas". Desde esta fecha, cada intervención militar se vio acompañada de una ofensiva de convencimiento en dirección de las masas campesinas y de los medios populares urbanos. No es, pues, sorprendente reencontrar ahora, entre el APRA y el ejército, el conflicto tradicional a propósito de la conquista de la "clientela" popular. En julio de 1962, después de haber derribado al gobierno de Manuel Prado, para evitar la toma muy probable de la presidencia por Víctor Raúl Haya de la Torre, eterno "Jefe Máximo" del APRA, el ejército esbozó una reforma agraria. Aun si hubiera sido aplicada con determinación —lo que no fue el caso— esta reforma sería de todas maneras demasiado tímida como para romper las estructuras arcaicas del Alto Perú. Pero la intención traducía una inquietud. . .

### *Una diplomacia "independiente"*

Se puede creer a los dirigentes actuales cuando insisten sobre su toma aguda de conciencia sobre las cuestiones sociales y campesinas durante la lucha contra las guerrillas. El general Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores, defensor talentoso de una "diplomacia independiente", tiene reputación de moderado. Declaró, no obstante, haber encontrado su camino de Damasco sobre el Altiplano: "ordené hacer una encuesta sobre la ribera

<sup>3</sup> En 1965, la mayoría parlamentaria —formada por el APRA y el partido del general Odría— deliberadamente había agrandado la importancia de las guerrillas, minimizada por el gobierno de Belaúnde Terry. Reclamaba una intervención anérgica contra la "subversión dirigida desde el extranjero".

norte del lago Titicaca donde las revueltas campesinas se multiplicaban. Es una región de grandes propiedades y de explotación feudal. Al sur del lago, por el contrario, donde el porcentaje de pequeños propietarios es muy grande, hay menos problemas". La conclusión para el canciller es clara: "es absolutamente necesario que los campesinos sean dueños de sus tierras si se quiere evitar problemas".

El golpe de Estado de julio de 1962 mostraba, por otra parte, que una fracción del ejército comenzaba a encontrar demasiado pesado el papel de "perro guardián de la oligarquía", que se le hacía jugar desde hacía cuarenta años. Sin duda la junta dirigida por el general "populista" Godoy tuvo que tranquilizar muy rápidamente al sector militar ligado a la oligarquía. No había llegado para los coroneles la hora de atravesar el Rubicón. Pero el remplazo de Godoy por Lindley —en apariencia simple cambio de persona en la cabeza de la Junta Provisional— ilustraba perfectamente esta indecisión, o aprehensión del ejército frente a la ruptura de la alianza tradicional con la oligarquía. En 1968 los oficiales de la "promoción terremoto", demasiado jóvenes para continuar otorgando una importancia excesiva al viejo antagonismo entre el ejército y el APRA, habían alcanzado un nuevo grado en la jerarquía, y se encontraban cerca de los centros de decisión.

El recuerdo del levantamiento aprista de 1932 en Trujillo ha condicionado desde hace mucho tiempo la vida política peruana. Las matanzas de oficiales y los fusilamientos, en represalia, de poco más o menos seis mil rehenes, cavaron un pozo de sangre y de odio, que no está todavía colmado, entre militares y apristas. La oligarquía tradicional y la nueva burguesía supieron explotar este resentimiento, llamando al ejército en su auxilio cada vez que sus privilegios y preponderancia corrían el riesgo de disminuirse por una victoria electoral del APRA, el único gran partido de masas en Perú. Pero ahora, la imagen de los apristas "rojos" ha prácticamente desaparecido. De 1963 a 1968, la alianza "contra natura" entre apristas y partidarios del antiguo dictador Odría en el Parlamento no solamente chocó a la izquierda revolucionaria, sino que el gran viraje a la derecha del APRA ha sido reprobado por los coroneles que estudian en el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares) las relaciones entre el subdesarrollo y la seguridad nacional.

### *Planificación y seguridad*

El CAEM fue fundado al finalizar la segunda guerra mundial; según sus directores, "se inspira a la vez en l'École des hautes études de la défense nationale, de París, y en el War College de Fort-Leavenworth". Los civiles, los funcionarios de alto rango y los oficiales superiores "capaces de cooperar con el gobierno a todos los niveles políticos y administrativos" siguen durante un año cursos de economía, sociología y estrategia, impartidos por profesores universitarios. Estos últimos, precisa el sociólogo Julio Cotler, del Instituto de Estudios Peruanos, "hablaban de subdesarrollo, de dependencia y de planificación económica, en una época en la que el uso mismo del término 'planificación' era considerado como tabú por la oligarquía". Los profesores del CAEM, de los cuales algunos pertenecen a la corriente social progresista, adoptan y hacen adoptar por los coroneles dos máximas: "No hay seguridad interna sin desarrollo económico" y "un ejército fuerte no puede mantenerse en un país débil".

El traumatismo provocado en la élite militar por la lucha contra la guerrilla y la lenta toma de conciencia de las nuevas relaciones sociales y políticas, no habrían sin duda bastado si la "promoción terremoto" no hubiera seguido los cursos del CAEM.

“Es ahí donde nosotros nos hemos formado”, coinciden en afirmar la mayoría de los ministros del general Velasco. Algunos de los profesores, antiguos o nuevos, del CAEM están en los puestos clave de asesores del gobierno militar. Periodistas, juristas, abogados, profesores entre los más brillantes, en su mayoría socialistas o cristiano-progresistas, se encuentran hoy en los pasillos del COAP (Comité de Organización de los Asesores de la Presidencia), organismo poco conocido, encargado de preparar los “golpes” asestados desde hace 16 meses por el gobierno: petróleo, reforma agraria, ley de restricción de la participación del capital extranjero en la banca, eliminación de los representantes de la banca privada en la dirección del Banco Central de Reserva, reorganización de los ministerios, nacionalización de las aguas, creación de un ministerio de pesca, etcétera.

El aspecto realmente revolucionario del golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 es claro: por vez primera en Perú, el ejército no busca, mediante su intervención, restaurar el orden tradicional, sino que se propone transformar la sociedad peruana enfrentándose a la oligarquía. Falta saber si el poder de esta oligarquía, que algunos dirigentes continúan situando en la propiedad territorial, no se ha transferido ya a la industria y a la banca. En este caso, la “modernización” emprendida por el ejército consistiría simplemente en favorecer a la “burguesía industrial” a expensas de la oligarquía terrateniente. O las dos “burguesías”, la de los campos de algodón o del azúcar y la de la pesca y la banca, están ya ligadas entre sí y asimismo son ya estrechamente dependientes de los intereses extranjeros. Para reforzar una burguesía industrial moderna —y tal es su meta declarada— el ejército debería entonces romper todos los lazos que unen esta última al extranjero. Esta tarea no parece posible sin el sostén de una fuerza revolucionaria y popular. Pero, aparentemente, el ejército se rehúsa a dar este paso.

Todo el poder viene de arriba. El ejército constituye el alpha y omega. Los asesores aconsejan, orientan, preparan los expedientes. Los coroneles, que son —con un general— los únicos miembros del COAP, deciden y transmiten al gobierno militar. Así aparece ya el riesgo de aislamiento de los hombres que sostienen una de las experiencias más interesantes en América Latina.

## II. CON LA AYUDA DE TUPAC AMARU

Las ruinas de Chan-Chan, la ciudad fortaleza del Imperio chimu que dominó el norte de Perú hacia el siglo trece, emerge apenas en las extensiones arenosas y desérticas cercanas a Trujillo. La ciudad muerta, construida en adobe, ha resistido el tiempo. Pero el silencio, solamente roto por el rumor de las enormes olas que rompen en la ribera del Pacífico, reina sobre los antiguos campos fortificados que evocan al Teotihuacan mexicano. Los vestigios de otras civilizaciones preincaicas, todavía desconocidas, duermen en el agrietado suelo de Chan-Chan.

Pero Chan-Chan, para los peruanos es, sobre todo, el recuerdo de una revuelta y de una tragedia. Seis mil fusilados fueron enterrados en julio de 1932 en una fosa común cuyo emplazamiento está indicado por una modesta cruz cercana a la ciudadela. Epílogo siniestro del levantamiento dirigido por los apistas en Trujillo. Desde diciembre de 1931, los enfrentamientos se habían multiplicado entre las fuerzas de la policía y militantes del APRA.

### La “Comuna” de Trujillo

Trujillo es el feudo de Víctor Raúl Haya de la Torre, la capital

de una rica región agrícola que ha sido llamada el “Sólido Norte”, en razón de la fuerte penetración del APRA.

Mil novecientos treinta y dos, para Haya de la Torre, es todavía el “período rojo”: denuncia del capitalismo norteamericano; liberación del indio explotado de las tierras altas mediante una reforma agraria radical; nacionalización de las riquezas del subsuelo. Es también la época de los “búfalos”, cortadores de caña de azúcar, atletas y conductores de hombres.

Uno de ellos, obrero de la hacienda Laredo, y miembro del partido aprista, dirige el asalto contra el cuartel general de las fuerzas del orden. Los oficiales y suboficiales son muertos por la muchedumbre furiosa. Durante cuatro días Trujillo será controlada por los rebeldes. Pero el ejército regular arraza la ciudad. La reunión prevista entre los insurgentes y una unidad militar sublevada, procedente de Cajamarca, bajo las órdenes de un joven coronel, fracasa. El coronel “se suicida”. La sublevación no tiene ya sentido. En Lima, el presidente Sánchez Cerro declara: “Quiero que la sangre de los apistas enrojezca las bayonetas. . .” El último día de la “Comuna” de Trujillo se desenvuelve en la anarquía. Cuando las tropas entran en la ciudad, descubren los cadáveres de otros oficiales sumariamente ejecutados. El “sacrilegio” fue lavado con la sangre de 6 000 rehenes tomados al azar. Llevados a Chan-Chan, éstos cavaron su tumba antes de ser abatidos por la metralla. Con cuatro años de adelanto, es una escena de la guerra de España. Durante cerca de 20 años Trujillo soportará la ley de los gobiernos militares.

Hoy, la hacienda Laredo, que pertenecía a la familia de origen alemán, Gildemeister, es una de las grandes plantaciones expropiadas en junio pasado por una reforma agraria radical que los apistas no lograron jamás imponer. ¡Qué símbolo! En 1964, el APRA votó en el Parlamento una enmienda que excluía a las grandes plantaciones azucareras de la costa norte de la modesta reforma agraria del gobierno de Belaúnde Terry. En octubre pasado, los hijos de los “macheteros” del levantamiento de 1932 fueron a la Plaza de Armas de Trujillo para aclamar al presidente de la República, general Velasco Alvarado. “Campesino nunca más el patrón comerá de tu miseria”, exclamó este último. . . Eran ciento veinte mil delante de la catedral y las casas de los patricios. Aun tomando en cuenta la buena organización de la manifestación, jamás la Plaza de Armas había reunido una muchedumbre tan numerosa, el alcalde de Trujillo habiendo omitido izar la bandera, para manifestar su “mal humor”, provocó que el consejo municipal de la ciudad fuera destituido de su cargo desde el día siguiente.

### Un Norte “menos sólido”

Los muros de la ciudad han guardado la huella del paso del Jefe de Estado. “Velasco, el pueblo está contigo. . .” En el centro y en las “barriadas” a lo largo de la carretera de Laredo, un dibujo se impone hasta la obsesión. Es el retrato estilizado de un hombre en forma de hoja de cuchillo, tocado con un sombrero negro, dándole un vago porte eclesástico: Tupac Amaru, el líder indio que sublevó a la población campesina de Cuzco en 1871. El asalto contra la antigua capital inca fracasó. Tupac Amaru fue decapitado en la plaza de armas de la más bella ciudad peruana, pero su recuerdo permanece en la memoria de los hombres del altiplano. Fue precisamente el “día del Indio”, el 24 de junio, el escogido por el gobierno para la proclamación de la reforma agraria. Menos de un siglo después de su muerte, Tupac Amaru es utilizado como símbolo de una operación cuyos objetivos son la formación de cooperativas y si es posible la autogestión. En Uruguay, los líderes del movimiento de gue-

rrilla urbana, los "Tupamaros", se han ya declarado seguidores del líder de la revuelta de Cuzco. ¿Pero, en Perú? ¿Quién decía que nadie era profeta en su tierra?

Las grandes líneas de la reforma son conocidas,<sup>4</sup> se propone remplazar el régimen de "latifundio" y de "minifundio" por "un sistema justo de propiedad". Prevé que "la expropiación de terrenos de propiedad privada sea declarada de utilidad pública y de interés social". Sobre la costa, la propiedad agrícola privada está limitada a 150 hectáreas. Los grandes complejos agroindustriales (algodón, caña de azúcar) serán transformados en cooperativas. Primer aspecto revolucionario: mientras que la ley No. 17037 del gobierno de Belaúnde Terry excluía las grandes plantaciones de la costa norte, el nuevo proyecto ha sido aplicado en prioridad a esta región controlada por el sector más dinámico de la oligarquía terrateniente. Pero el "Sólido Norte" era también el feudo sindical y político del APRA. La nueva ley ataca al sector agrario de la burguesía, arcaica o moderna, pero representa también una amenaza para la preponderancia aprista.

La alianza *contra natura* entre el APRA y la oligarquía se vuelve hoy día contra Haya de la Torre, golpeado en su bastión al mismo tiempo que los Gildemeister, los De la Piedra, los Aspíllaga o la Grace Company. También los dirigentes sindicalistas (en su mayoría apristas) de las ocho grandes plantaciones que aportan el 90% de la producción total, no buscan ocultar sus preocupaciones. Ellos no sabrían evidentemente discutir el principio de una reforma que figura todavía en un buen lugar en el programa del APRA. "Hace treinta años que la reclamamos y siempre hemos tomado partido en favor de las cooperativas en la costa norte", declaró Haya de la Torre, cuyo optimismo natural parecía apenas empañado. "De cualquier manera —dijo— la restauración del partido está asegurada. . ."

"¡Los regímenes pasan y el APRA permanece!" Sin duda. Pero la seguridad obligada del viejo tribuno no es compartida, tal parece, por los sindicalistas que encontramos en Cartavio, en el departamento de La Libertad. ¿Cómo, se preguntan ellos, podremos mantener la existencia de sindicatos cuando la cooperativa esté constituida? El texto de la ley no es explícito a este respecto.

Varios dirigentes, sin embargo, han dado a entender claramente que "los sindicatos serían inútiles a partir del momento en que los obreros administraran ellos mismos la cooperativa". Los líderes apristas tienden a asegurarse afirmando que "el período transitorio corre el riesgo de durar mucho tiempo". "De todas maneras —agregan— nuestro papel no ha cambiado. Debemos defender los intereses de los obreros frente al Estado-patrón, como ayer los defendíamos frente a los grandes propietarios conocidos o anónimos. . ." Pero deben saber que el gobierno militar será un asociado ciertamente menos conciliador que el fundado en los poderes de la familia Gildemeister o de la Grace Company. Los medios de presión clásicos de los sindicatos, y muy particularmente la huelga, corren el riesgo de ser denunciados como "medidas contrarrevolucionarias" por un régimen que asocia el éxito de la reforma agraria con la "conquista de la seguridad y de la dignidad nacionales".

La aplicación, en prioridad, de la reforma sobre el litoral norte es audaz y espectacular. Pero la eventual ruptura de las estructuras arcaicas en los métodos de explotación de la tierra y las relaciones sociales debe igualmente, y sobre todo, ser buscada en los altos valles andinos y sobre el altiplano desheredado. El gobierno está resuelto a regular él mismo el ritmo de

las operaciones. En el departamento de Puno, cerca del lago Titicaca, los campesinos habían decidido por propia iniciativa aplicar la nueva ley. Fueron rápidamente puestos en orden por la policía. Todo indica que los dirigentes no piensan extender la reforma a la sierra más que con mucha prudencia.

Es verdad que las condiciones son radicalmente diferentes en el litoral y en la montaña, para no mencionar los inmensos espacios amazónicos. La vieja tesis del "Perú Dualista" es abandonada ahora por los sociólogos peruanos. Hoy estos últimos prefieren hablar de un "Perú del interior desigualmente desarrollado". El profesor José Matos Mar describe el litoral como una "sucesión de cincuenta y dos valles del Nilo en miniatura", distingue el Perú "útil" (litoral norte, la gran Lima, la región de Huancayo) de las regiones "periféricas" que han alcanzado un estadio de integración muy variable. Conviene, según él, "revisar totalmente las ideas adquiridas sobre el carácter 'irrecuperable' de las poblaciones del Alto Perú". Estima que "el medio rural manifiesta desde 1960 una movilidad y una imaginación notables para integrarse realmente a la vida nacional".

El proletariado de las grandes plantaciones del norte es comparable (en razón de su relativa debilidad numérica y de su encuadramiento sindical por el APRA) al proletariado del petróleo en Venezuela. No sabría, en todo caso jugar un papel determinado en la evolución política y social del país. Es importante seguir los esfuerzos de las autoridades para acelerar la formación de verdaderas cooperativas, en una región dominada por las grandes familias peruanas o extranjeras, y por las sociedades capitalistas. El entusiasmo y el valor de los equipos encargados de explicar a los técnicos y a los trabajadores el interés de la fórmula cooperativa son innegables, pero sus medios son muy modestos. Jaime Llosa<sup>5</sup> y sus jóvenes asistentes recorren con tenacidad el litoral norte desde hace seis meses, multiplicando las reuniones de información. Tropezan con la indiferencia de la gran mayoría de los estudiantes hostiles a toda acción del gobierno. Sólo una ínfima minoría de intelectuales se apasionan por la reforma. Por otra parte, los fondos destinados a la "capacitación" (explicación de la reforma) fueron reducidos en diciembre. No alcanzan la sexta parte de la suma primitiva demandada por los responsables del organismo. "Sin capacitación, no habrá reforma agraria", dicen los ayudantes de Jaime Llosa.

Podemos agregar, con el sociólogo Julio Cotler, que no habrá reforma agraria verdadera, "sin una real participación de las masas". La reforma tiene también por meta "transferir el capital agrario al sector industrial". Las cooperativas, el fortalecimiento de las comunidades indígenas, la autogestión, la colaboración entre pequeños propietarios y cooperativistas, el desarrollo de los créditos agrícolas y de la asistencia técnica a los campesinos, figuran, ciertamente, en buen lugar en los planes gubernamentales. Pero el "desarrollo de una fuerte burguesía industrial nacional" parece ser uno de los objetivos primordiales buscados a través de la nueva ley. Muchos peruanos dudan en consecuencia que la "oligarquía terrateniente haya recibido un golpe mortal", puesto que ella tiene en muchos casos, la posibilidad de reinvertir sus beneficios y sus capitales en la industria.<sup>6</sup> La pregunta que se plantea primero es, pues, saber si esta

<sup>5</sup> Jaime Llosa dirige el ONDECOOP (organismo de desarrollo de las cooperativas) que depende del Instituto de Reforma Agraria y que tiene la tarea de organizar las reuniones de información sobre los objetivos de la reforma.

<sup>6</sup> Los propietarios o las sociedades expropiadas son indemnizados en bonos de la reforma agraria y pueden cobrar en efectivo la mitad del valor de los bonos con la condición de invertir esta suma en la industria. Esta medida favorece a aquellos que tienen lazos con los grupos extranjeros o que poseen ya intereses en la industria.

<sup>4</sup> Ver "Se decreta la reforma agraria", *Comercio Exterior*, julio de 1969, p. 514. (Ed.)

“burguesía nacional” existe y si ella tiene la voluntad o la posibilidad de luchar eficazmente contra la empresa de capitales extranjeros y el poder de las sociedades norteamericanas de múltiples actividades (conglomerados) ya sólidamente implantados.

### III. UN PASO ATRAS, DOS ADELANTE

Durante varias semanas, a fines del año pasado, una delegación de técnicos soviéticos visitó conciensudamente a Perú. El objetivo principal de esta visita era el estudio del plan de irrigación de la región de Olmos, proyecto ya antiguo e importante que prevé el cambio de dirección de ciertos afluentes del Amazonas para ampliar la superficie cultivable del litoral norte. Los expertos peruanos creyeron hacer bien en someter en la misma ocasión a los soviéticos sus planes de explotación de las riquezas del subsuelo.

El interés sobre las minas de cobre de Cuajone, en el sur del país, constituye el más espectacular de estos proyectos. La Southern Peru Cooper Corporation, que explota ya el yacimiento de Toquepala, perteneciente a la misma “reserva estratégica” de Estados Unidos tenía una opción sobre Cuajone. Después de sobrevolar la cicatriz ocre y verde de Toquepala, copia del Chuquicamata chileno, la colina desnuda de Cuajone aparece rodeada de barrancas sin vida. El primer trabajo consistirá en pulir esta colina gigante para llegar al mineral, situado a un centenar de metros de profundidad. La explotación propiamente dicha no comenzará antes de 1974. Las reservas son estimadas en 453 millones de toneladas. Costo total de los trabajos: 335 millones de dólares. Se trata, pues, de una obra gigantesca que debe colocar al cobre peruano en el primer lugar de la industria nacional y permitir a Perú lanzarse a la competencia con Chile, primer productor latinoamericano.

Los soviéticos manifestaron el más grande interés por las explicaciones de los expertos peruanos. Pero su conclusión, se dice, dejó a éstos pasmados: “Es evidente que ustedes deben confiar los trabajos a una gran sociedad norteamericana. . .”

#### El “chantaje de Washington”

Los militares peruanos, en el poder desde octubre de 1968, no han sido los primeros en ampliar sus relaciones diplomáticas y comerciales con los países del bloque socialista. El gobierno de Belaúnde Terry había iniciado esta política de acercamiento con el Este. El nuevo régimen la ha continuado con el vigor que pone en todas las cosas. La diplomacia peruana, hasta entonces atenta a los más pequeños rumores de Washington, no dudó desde octubre de 1968 en exaltar la cólera de Estados Unidos expropiando los bienes de la International Petroleum Company, filial de la Standard Oil of New Jersey. El general Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores, ha explotado muy hábilmente la reunión de la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina) en Lima, después de la de Viña del Mar, en Chile en mayo pasado, para reforzar las vacilaciones del Departamento de Estado, presionado por los lobbies del petróleo y de los pescadores californianos, para aplicar las enmiendas Hickenlooper y Pelly.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> La Enmienda Hickenlooper permite suspender la ayuda pública norteamericana a los países cuyos dirigentes hubieran expropiado bienes norteamericanos sin indemnización. La Enmienda Pelly prevé, por otro lado, la suspensión de la ayuda militar en el caso de que los gobiernos extranjeros no respeten los intereses norteamericanos. Los pescadores californianos reclaman la aplicación de la Enmienda Pelly al gobierno de Lima.

Las eventuales represalias norteamericanas son graves. Aunque la Enmienda Hickenlooper no ha sido aplicada formalmente, la ayuda pública a Perú ha sido suspendida efectivamente y esta medida “invisible” es considerada en Lima como “un chantaje del gobierno de Washington”. En junio pasado la gira, por lo menos tumultuosa, del gobernador Rockefeller en América Latina incitó al gobierno de Nixon, negligente pero pragmático, a evitar un enfrentamiento demasiado brutal con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos muy atentos a la experiencia de los militares peruanos. Esta preocupación y la habilidad del general Mercado Jarrín han, por el momento, bloqueado la amenaza de suspensión de las compras de azúcar, que representarían una pérdida de 120 millones de dólares por año para Perú y un riesgo de desempleo para poco más o menos cuarenta y cinco mil obreros.

El gobierno peruano no ha cedido a las amenazas directas y a las presiones ejercidas por los diferentes enviados especiales del gobierno de Washington en Lima. “La cuestión de la IPC no es negociable, repiten los dirigentes peruanos. Pero no nos oponemos a las misiones de información de Estados Unidos. . .”

El gobierno peruano se ha esforzado también por encontrar nuevos apoyos, ha renovado las relaciones diplomáticas con la URSS y concluido acuerdos comerciales con Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y Bulgaria. La presencia en Lima de una importante embajada soviética no tiene nada que pueda chocar en la hora de la coexistencia. “Para nosotros, peruanos —dice Francisco Igartúa, director de la excelente revista *Oiga*— es una revolución. Hace solamente dos años, delegaciones y cuerpos de ballet soviéticos evitaban la escala en Lima.

Perú ha solicitado un asiento de observador en la próxima conferencia de los países no alineados. Ha amenazado con denunciar la aplicación de la Enmienda Hickenlooper ante la Organización de Estados Americanos, organismo regional poco acostumbrado a tales audacias. “No queremos recibir órdenes de nadie”, nos dijo el ministro de Relaciones Exteriores. A propósito del asunto de las 200 millas,<sup>8</sup> el Gobierno peruano ha visto, en una eventual aplicación de la Enmienda Pelly, una ruptura por parte de Washington del tratado bilateral de ayuda militar de 1952, y ha expulsado las misiones militares de Estados Unidos.

#### El contrato de Cuajone

Oponerse a las presiones norteamericanas y renovar las relaciones diplomáticas y comerciales normales con los países del Este es una cosa. Acudir sistemáticamente al bloque socialista es un paso que los dirigentes peruanos se rehúsan a dar. Primero, porque las ofertas de servicio de la URSS y de algunos países comunistas han parecido realmente poco interesantes al gobierno. El episodio de Cuajone ilustra una decepción general. Es natural que los soviéticos, habiendo ellos mismos acudido a los japoneses para la explotación más intensiva de su cobre, hallan rehuido la responsabilidad ante las iniciativas peruanas. Aun proposiciones más concretas de algunos países socialistas no han, se dice en los medios autorizados, suscitado mucho entusiasmo en Lima. Rumania estaría, si embargo, a punto de concluir un importante acuerdo de asistencia técnica y la URSS ha ofrecido material agrícola por una cantidad que asciende a 30 millones de dólares. “Aun si Estados Unidos y el Occidente se

<sup>8</sup> Estados Unidos no reconoce el límite de aguas territoriales fijado en 200 millas por los gobiernos de Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

libran de compromiso —nos declaró el general Fernández Maldonado, ministro de Minas y Energía— encontraremos fácilmente otras fuentes de financiamiento. . . ”

El Gobierno finalmente prefirió tener en cuenta con realismo todos estos hechos, y ha firmado el muy importante acuerdo de Cuajone con una filial de la Smelting and Refining Company, a pesar de que no cesa desde hace un año de denunciar la “influencia excesiva de los capitales norteamericanos” y afirmar su deseo de “limitar la dependencia del país respecto de Estados Unidos”.

“No es fácil querer ser independiente —nos ha dicho el general Velasco—. Nosotros hemos soportado las presiones de Estados Unidos. No solamente dependemos de las inversiones extranjeras, sino que también dependemos de las decisiones de aquellos que imponen una estrategia mundial de inversiones. . . Deseamos ser independientes. Pero nos rehusamos a jugar el juego del neutralismo. Es un camino estrecho. . . ”

“La Southern Peru Cooper Corporation —recuerda, por su parte, el general Mercado Jarrín— tenía ya un pie en el lugar. Tenía todos los planes de desarrollo del cobre, el material, la experiencia. . . ” Agrega: “Somos revolucionarios y humanistas, pero somos occidentales”.

#### *El artículo 56 y la soberanía*

No es posible juzgar las eventuales consecuencias del acuerdo de Cuajone fuera de este contexto diplomático y económico. “Sabemos —dicen los consejeros del presidente Velasco— que Cuajone es un paso atrás para la revolución, pero sabemos también que permitirá dar en seguida dos pasos adelante”. ¿Es esto seguro? Los más escuchados de los consejeros estiman sin duda que las condiciones obtenidas por el Gobierno “son las menos malas posibles”; pero piensan también, sin decirlo demasiado, que hubiera sido quizá preferible “en interés de la revolución” renunciar “por el momento a toda extensión espectacular del plan de explotación del cobre”. Estiman que “el proyecto finalmente firmado entre el Gobierno y la Southern Peru no es en principio muy diferente de aquel que había sido aceptado a finales de noviembre y que había provocado una revuelta en el grupo de los coroneles de izquierda”.

En particular el artículo 56 del actual código de minas no ha sido modificado antes de la firma del acuerdo de Cuajone. “Con el artículo 56 —afirmó en diciembre la revista *Oiga*, que en ese momento dio expresión a las reclamaciones de los coroneles— no hay soberanía. . . ” Este artículo proporciona ventajas fiscales substanciales a las sociedades extranjeras que inviertan en minas. Será sin ninguna duda modificado en el nuevo código de minas que el gobierno piensa promulgar antes del mes de marzo. El Estado peruano ejercerá entonces, en virtud de otras disposiciones radicales, el verdadero control de la comercialización de todos los minerales, comprendiendo el cobre. Y los acuerdos ulteriores que el Gobierno podrá eventualmente firmar con otras compañías extranjeras para la explotación de los yacimientos de Quevalleco, del Cerro Verde, de Mirococha, y de Michiquillay deberán entonces permitirle reforzar todavía más su control sobre “los centros de decisión” de la refinación y de la comercialización.

Pero es claro, en lo inmediato, que Cuajone no es mal negocio para la Southern Peru, amenazada de perder sus derechos sobre el yacimiento si no hubiera dado a conocer “su plan de trabajo” antes del 31 de diciembre de 1969. Las ventajas para el Gobierno peruano no se pueden tampoco negar. La partici-

pación del Estado en los beneficios de la explotación será sensiblemente más importante que en el pasado.

Pero, ¿encontrará el Gobierno una fuente de financiamiento no norteamericana que le permita instalar una empresa capaz de refinar, por su cuenta y en el lugar, la mayor parte del mineral extraído por la Southern? Es, en efecto, que sobre este punto capital habría podido desarrollarse un debate público si el nuevo estatuto de prensa no amenazara con aplastar a aquellos que “atenten contra la seguridad nacional”. Pocos peruanos conocen todos los elementos del “expediente Cuajone” que encierra, sin embargo, la clave de la filosofía política de la Junta. El mismo general Velasco confió a sus íntimos: “Si firmo Cuajone, no es bueno. Pero si no firmo es peor. . . ” Esta incisiva ocurrencia, a la manera del Presidente de la República, ilustra la dificultad evidente de la Junta en la víspera de concluir un acuerdo tan importante con el poderoso grupo norteamericano.

“Hubiera sido preferible instaurar un control de cambios para administrar mejor nuestro presupuesto y planificar una economía de tipo socialista. La nacionalización de la venta de los minerales no es más que una concesión a la opinión pública. ¿Por qué no adoptar la misma medida en la industria del azúcar, del algodón, de la harina de pescado? Perú es el primer exportador mundial de este producto. Intereses extranjeros considerables controlan nuestra industria de la pesca. La banca está igualmente en gran parte sometida a los grupos financieros norteamericanos. Los supermercados, las cadenas de producción de alimentos, la industria manufacturera: lo mismo sucede en los sectores de nuestra economía donde la ley de la concentración favorece la influencia creciente del capital extranjero. . . ”

Esta grave reserva de uno de los principales consejeros del gobierno parece mejor fundada, ya que la satisfacción de los empresarios de Lima es más grande desde la firma de Cuajone.

“Esperamos —nos dijo el director de uno de los principales grupos norteamericanos en Lima— que Cuajone va a acelerar el ritmo de las inversiones extranjeras en la industria. Hace un año, era el marasmo. Todo va a cambiar ahora. Las inversiones directas deberían alcanzar pronto la cifra de un mil millones de dólares. . . ”

“Es bien claro el peligro”, recuerdan los coroneles y sus consejeros de izquierda. “¿Cómo luchar eficazmente contra la dependencia si al mismo tiempo se abre tan generosamente la puerta al capital extranjero? ”

Para la Iglesia peruana, que aplaudió la ley de reforma agraria “el contrato de Cuajone nos coloca delante de una opción: o bien aceptamos la estructura de dominación, o bien escogemos la vía de una sociedad solidaria, en donde el hombre no será un número sino una persona”.

Los grupos políticos de extrema izquierda —excepción hecha del partido comunista pro soviético y de un grupo trotskysta favorable a la Junta—<sup>9</sup> que han adoptado una actitud resueltamente hostil, “la política de la Junta, después de Cuajone, se parece a la del gobierno reformista de Belaúnde Terry. Es claro hoy que este gobierno no es ni revolucionario ni nacionalista. Es un régimen autoritario que se propone modernizar las estructuras y que coloca todas sus esperanzas en el apoyo de una burguesía nacional que está ya bajo las órdenes del extranjero. Es un gobierno en la línea de la corriente reformista latinoamericana, neocapitalista, cuidadosa de la eficacia tecnocrática, donde se descubre aun cierta influencia del Opus Dei. . . ”

<sup>9</sup> El grupo de Ismael Frías que publica la revista *Inkari* apoya sin reservas la política de la Junta.